

LA VÍA LIBERAL/ Los planes de PSOE y Sumar para acortar la duración de la jornada laboral contrastan con la puesta en marcha de jornadas de hasta 13 horas diarias en Grecia para mejorar su productividad.

¿Deberíamos trabajar más, como los griegos, en vez de recortar la jornada?

ANÁLISIS

Ricardo T. Lucas

La semana pasada se produjo un vórtice temporal paradigmático. Al mismo tiempo que en el Congreso de los Diputados se rechazaba la propuesta del BNG para recortar la jornada laboral a 35 horas semanales –por debajo incluso del tope de 37,5 horas promovido por Yolanda Díaz–, en el Parlamento de Grecia se daba luz verde a las jornadas laborales de hasta 13 horas, aunque sólo se podrán realizar durante un máximo de 37 días al año.

El fuerte contraste entre la política laboral en ambos países mediterráneos, aunque situados en extremos opuestos tanto geográficamente como por la ideología de sus respectivos gobiernos, hace oportuna la pregunta sobre si el Ejecutivo de PSOE y Sumar está equivocado con su apuesta de reducir las horas trabajadas a toda costa. Primero mediante el fallido decreto para rebajar la duración máxima de la jornada laboral de 40 horas a la semana a 37,5 horas y, tras el rechazo parlamentario al proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para esta legislatura, a través de un endurecimiento del control horario, que trata de impedir que los trabajadores se vean obligados a realizar más horas de las que tienen pactadas en convenio. Lo que, según denuncian los sindicatos, es una práctica habitual en muchas empresas pese a que desde 2021 está en vigor la obligación de registrar el tiempo de trabajo efectivo.

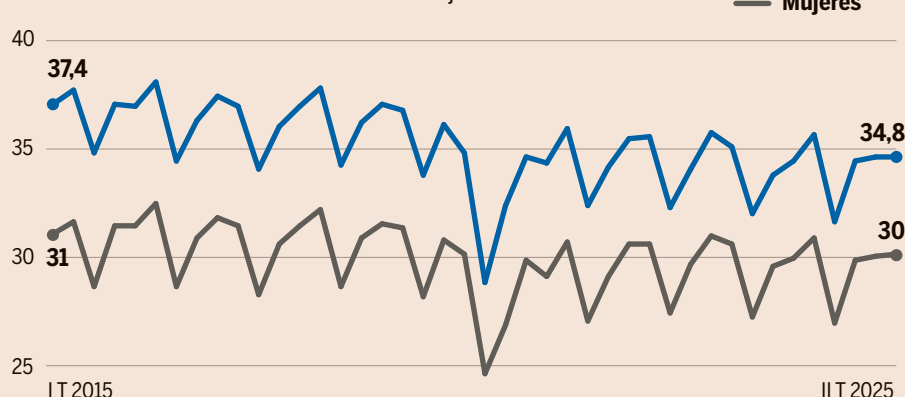
Desde que se puso en marcha el control de las horas trabajadas, la duración media de la jornada laboral en nuestro país se ha mantenido relativamente estable (ver gráfico), lo que confirmaría el diagnóstico realizado por la propia Díaz hace semanas en un debate parlamentario: “No está funcionando”, reconoció. Por su parte, las patronales reclaman abandonar el planteamiento y las campañas incitando a “trabajar menos para vivir mejor” y abordar el sempiterno déficit de productividad que sufre la economía española, al cual achacan el hecho de que en algunos sectores las jornadas de trabajo sean tan largas.



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, junto a Pedro Sánchez.

¿CUÁNTAS HORAS SE TRABAJA EN ESPAÑA?

Número medio de horas efectivas trabajadas a la semana.



Expansión

Fuente: INE

Aunque hay un cierto debate sobre cómo medir la productividad real, las diferentes estadísticas coinciden en que se mantiene estancada o sólo ha crecido ligeramente desde 2019. Y es que la pandemia del Covid supuso un punto de inflexión, ya que a partir de entonces las horas “efectivas” de trabajo por cada trabajador se han ido reduciendo. Una tendencia que se debe, por un lado, a las altas tasas de absentismo y, por otro, a que el fuerte aumento de la contratación ha derivado en un reparto de la carga de trabajo real. Aunque hay más personas ocupadas que nunca en España, las horas reales de trabajo efectivo son inferiores a las que se realizaban hace seis años con menos trabajadores.

Por otro lado, la distribu-

Aunque hay más ocupados que nunca en España, las horas reales de trabajo son menos que en 2019

ción de la jornada efectiva en nuestro país es asimétrica. Según Eurostat, son 10,5 millones los ocupados que superan las 40 horas de trabajo a la semana, habitualmente asalariados con relaciones laborales largas, mientras que quienes tienen contratos más recientes realizan habitualmente jornadas más cortas. Desde la generalización del contrato fijo-discontinuo a raíz de la reforma laboral de 2022, algo más de la mitad de los nuevos ocupados registran menos de 6 horas de trabajo efectivo.

Por eso algunos economistas discuten las cifras oficiales de ocupados, pues incluyen a los fijos-discontinuos cuando su contrato está suspendido y a los trabajadores que no acuden a su puesto sin causa justificada, que los expertos estiman en un 20% de las bajas.

Sanciones vs incentivos

Mientras el Gobierno español agrava los controles y sanciones para impedir que las compañías de los sectores que denuncian falta de mano de obra la suplan con jornadas más dilatadas de sus empleados, en Grecia el conservador Kyriakos Mitsotakis ha optado por incentivar la prolongación de la jornada para tratar de elevar la productividad de su economía. Oficialmente, en el país heleno la jornada laboral

La relación directa entre absentismo y horas extra

Las cifras de absentismo laboral y acumulación de horas extra parecen que van de la mano en nuestro país. Los cálculos más recientes apuntan a que, en promedio, algo más de un millón y medio de personas faltan cada día a su puesto de trabajo, lo que según las empresas resulta inasumible. Esta cifra se ha disparado tras la pandemia debido al aumento sostenido de las bajas por incapacidad temporal. Antes del Covid unos 500.000 asalariados por semana no acudían a su puesto de trabajo por estar de baja médica, una cifra que ahora supera el millón de personas. En paralelo, la cifra de horas extra realizadas cada semana se ha elevado un 16% según el INE, hasta un total de 7 millones de horas. De ahí la denuncia de los sindicatos de que algunas empresas están supliendo el aumento de las bajas imponiendo una mayor carga de trabajo al resto de su plantilla. Una tesis que parece validar el hecho de que la subida de las horas extra pagadas desde 2019, del 35%, haya sido claramente superior al crecimiento de las horas extra que no son remuneradas, las cuales han aumentado un 7% en el mismo periodo.

es de 40 horas, pero la reforma laboral aprobada el año pasado permite añadir hasta 8 horas más cada semana si lo pactan la empresa y el trabajador, con una bonificación del 40% por cada hora extra. Esa misma gratificación se aplicará a los trabajadores que realicen las nuevas jornadas de 13 horas, que aun así han cosechado el rechazo unánime de la oposición y los sindicatos.

La cuestión es cuál de esas políticas logra mejorar la productividad y el poder adquisitivo, y atraer más talento.

Sumar plantea nacionalizar la vivienda amenazada de desahucio

Expansión. Madrid

Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, planteará esta semana nuevas medidas de intervencionismo estatal en el terreno de la vivienda. En concreto, el grupo defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso que conmina al Ejecutivo a nacionalizar los hogares amenazados por un desahucio, incorporándolos al parque público de vivienda, o “explorar la posibilidad” de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

Ambas propuestas serán presentadas mañana ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja como remedios a la crisis de la vivienda, que en Sumar considera uno de los principales conflictos sociales de la actualidad, fundamentalmente por la falta de casas asequibles y el desajuste entre salarios y los precios del mercado inmobiliario. El grupo plurinacional, informa *Europa Press*, calcula que en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, cuando la cifra debería rondar los 1,8 millones para situarse en el promedio europeo. En esta línea, el partido propone elevar hasta, al menos, el 2% del PIB el gasto en políticas públicas de vivienda hasta el 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.

Además, Sumar aboga por “erradicar los desahucios” incorporando los inmuebles al borde de esta situación al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o garantizando una renta mínima o una moratoria en casos de vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones particulares. El partido también propone usar las empresas públicas e vivienda para construir 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles al año.

Podemos y los interinos

En paralelo, Unidas Podemos defenderá esta semana ante el Congreso una reforma legal para que los empleados públicos que hayan sufrido un exceso de temporalidad, como los interinos, que calcula en 900.000 trabajadores, obtengan la condición de empleados públicos fijos.